



Organización de los
Estados Americanos



**INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS
CONTEMPLADOS EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN
SALVADOR”**

Primer Agrupamiento de Derechos

RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR LA SOCIEDAD CIVIL

Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales
previstos en el Protocolo de San Salvador

Washington, D.C., 3-6 de mayo de 2016

1. Durante el periodo de recepción de los informes nacionales, diferentes organizaciones de derechos humanos, de derechos de las mujeres, universidades, entre otros, remitieron documentos complementarios de análisis relacionados con el monitoreo del cumplimiento de los derechos incluidos en el Protocolo de San Salvador. A la fecha se recibieron recomendaciones para siete países: Colombia, México, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Uruguay.
2. El GT agradece especialmente estas contribuciones, las cuales han sido consultadas a lo largo del proceso de revisión, en los casos de los países que presentaron informes nacionales. El GT valora particularmente estos aportes e invita a distintos actores no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil a enviar información relacionada con los indicadores de monitoreo del Protocolo, así como otra información pertinente sobre el cumplimiento de los derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador.
3. A continuación el GT incorpora una síntesis de las recomendaciones realizadas por las organizaciones que enviaron información correspondiente al primer agrupamiento de derechos:

MÉXICO

4. El primer documento recibido fue el “Informe Alternativo de Sociedad Civil. Primer Informe de México al Protocolo de San Salvador” presentando y elaborado por la Plataforma Mexicana de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Cumplimiento al Protocolo de San Salvador integrada por: Programa Universitario de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; Coordinación del Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.; Observatorio de Política Social y Derechos Humanos; DECA Equipo Pueblo, A.C; Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) - Capítulo Mexicano; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México CLADEM- México; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Grupo de Información en Reproducción Elegida.
5. El GT considera de suma utilidad este informe, que contiene los indicadores del primer agrupamiento de derechos contenido en el Protocolo de San Salvador para el caso de México; además, las fichas técnicas se pueden consultar en: www.pudh.unam.mx.
6. El segundo documento recibido para México fue enviado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir titulado “Informe de Avance en la Implementación del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en México para el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador”.
7. El GT agradece el informe cuyo objetivo es “acercar al proceso de evaluación información relevante sobre el avance en la implementación del derecho a la salud, particularmente en

relación con la salud sexual y reproductiva y al acceso al aborto por violación, por lo cual se compone de tres partes; contexto de la violencia contra las mujeres, específicamente la violación sexual; el marco normativo que existe para garantizar a las mujeres un aborto por violación y la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; y recomendaciones en la materia con la finalidad de que sean un aporte”. El GT considera sumamente valiosos los datos aportados por esta organización respecto al derecho a la salud sexual y reproductiva.

COSTA RICA

8. El GT recibió un documento del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y la Colectiva por el Derecho a Decidir, que se titula “Informe de avance en la implementación del Derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR) en Costa Rica, para el Grupo de Trabajo de análisis sobre la implantación del Protocolo de San Salvador”. El GT agradece especialmente la contribución, cuyo objetivo, es “acercar, al proceso de evaluación, información relevante sobre el avance en la implementación del derecho a la salud, particularmente en relación con la SSyR que es el que le ocupa revisar al grupo en este periodo.” El informe destaca que: “los datos [acercados por el gobierno costarricense] evidencian la necesidad de redoblar esfuerzos en programas amplios e integrales en educación de la sexualidad, prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH, y de servicios amigables y de calidad en SSyR para las poblaciones adolescentes y jóvenes, que aseguren además el acceso ágil a métodos de protección, y que se ajusten a sus necesidades y características. De igual manera, desde un enfoque de diversidad, los servicios además deberían considerar las necesidades específicas de poblaciones sexualmente diversas”.
9. El GT toma nota de la mención realizada por dicho informe, que destaca que “Costa Rica cuenta con un alto reconocimiento legal del derecho a la salud en general. Sin embargo, este reconocimiento en lo legal no se extiende a los servicios de SSyR. De la misma forma se dará cuenta de los problemas que presenta no solo la falta de incorporación del reconocimiento legal de prestaciones tan importantes como el aborto para mujeres víctimas de violación o la aprobación y registro de la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE), sino que también señala los problemas de interpretación que aparecen en la aplicación de normas relacionadas con la SSyR, por ejemplo, la interpretación restrictiva del concepto de salud, para excluir la salud psíquica, como habilitante para acceder al aborto terapéutico, que es la única indicación legal en el país hasta el momento”.

EL SALVADOR

10. En el caso de El Salvador, el GT recibió un informe del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) de El Salvador, titulado “Informe de avance en la implementación del Derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR) en El Salvador”. Este reporte se basa principalmente en el informe “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador,” publicado recientemente por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Agrupación Ciudadana). Para ello, se divide en 4 partes: (1) un análisis sobre la recepción del

derecho a la salud en El Salvador; (2) una visión más profunda sobre las consecuencias de la criminalización del aborto en la implementación progresiva del derecho a la salud (3) ejes transversales (igualdad y no discriminación y acceso a la justicia); (4) conclusiones y recomendaciones”.

11. El informe contiene un análisis de la legislación de aborto salvadoreña, enfatizando, entre otros aspectos, los efectos perjudiciales e incluso mortales que la criminalización del aborto tiene sobre la salud y la vida de las mujeres. Asimismo, el informe menciona que en “El Salvador se penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia. Este acto en sí constituye una violación al derecho a la salud, ya que al no tener excepciones, aun cuando la vida de la mujer está en riesgo, el estado falla en la protección del derecho a la salud y/o la vida de la persona. La criminalización del aborto pone en riesgo la vida de las mujeres, ya que estas acuden a prácticas de abortos ilegales y clandestinos que pueden ocasionar la muerte. Esta política de criminalización fue modificada en 1998, ya que antes existía una política que admitía el aborto en ciertas circunstancias, lo que hace la actual criminalización una política regresiva frente al derecho a la salud de las mujeres”. El GT toma nota de las recomendaciones efectuadas en el informe.

PERÚ

12. El GT agradece el envío por parte del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) del informe titulado “Informe de avance en la implementación del Derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR) en Perú para el Grupo de Trabajo de análisis sobre la implantación del Protocolo de San Salvador”.
13. El informe destaca que “se requiere el fortalecimiento de iniciativas para el mejoramiento de la calidad de la atención de las mujeres antes, durante y después del embarazo, el parto y el puerperio. Para ello es central la puesta en marcha de las estrategias ya aprobadas por el Estado peruano, respecto de la ampliación de la cobertura de los servicios de SSyR, la incorporación de una perspectiva intercultural y comunitaria en la atención en SSyR que permita el abordaje integral de los aspectos físicos, psíquicos y sociales”. El GT agradece la información proporcionada y las recomendaciones incluidas en el informe.

URUGUAY

14. El GT recibió en el caso de Uruguay, un informe de Iniciativas Sanitarias de Uruguay, titulado “Informe de avance en la implementación del Derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR)”. Este reporte busca acercar al proceso de evaluación información relevante sobre el avance en la implementación del derecho a la salud, particularmente en relación con la salud sexual y reproductiva (SSyR). El informe se divide en 3 partes: (I) una breve introducción; (II) la exposición de información sobre los indicadores estructurales, de proceso y de resultado que se relacionan con la SSyR y las categorías transversales; (III) conclusiones, recomendaciones y preguntas sobre el proceso de implementación local del referido derecho.

15. El GT recoge la información proporcionada sobre la disponibilidad de la atención de la SSyR. Agrega el informe que la SSyR en Uruguay “constituye un determinante central del estado de salud de la población y especialmente de las mujeres. Es por ello que en cualquier medición sobre la implementación del derecho a la salud, es indispensable un enfoque que permita evaluar el impacto particular sobre la SSyR de las mujeres y otros grupos socialmente subordinados y/o discriminados (adolescentes, personas con discapacidad, diversidad sexual, indígenas, etc.)”.

HONDURAS

16. El GT recibió un informe sobre Honduras, del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), titulado “Informe de avance en la implementación del Derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR) en Honduras para el Grupo de Trabajo de análisis sobre la implementación del Protocolo de San Salvador”.
17. Este reporte destaca que “se requiere la revisión de la normativa vigente que restringe el acceso a los servicios de SSyR, en especial sobre DDRR, para garantizar su ajuste a los estándares constitucionales y de derechos humanos a los que se ha comprometido el Estado hondureño. Como mínimo, se requiere que se elimine la prohibición de la anticoncepción de emergencia, que se permita el acceso a la información sobre esta y que se incluya el acceso a la anticoncepción de emergencia en los protocolos de violencia sexual. Además, el aborto debe permitirse como mínimo, en casos en que la salud y la vida de la mujer se encuentren en peligro, así como en casos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y en casos de violación”. El GT agradece los aportes y recomendaciones por parte de este informe.

COLOMBIA

18. En el caso de Colombia, el GT recibió un informe de Profamilia de Colombia, titulado “Informe de avance en la implementación del Derecho a la salud sexual y reproductiva (SS y R)”.
19. El GT agradece las contribuciones, que en este caso se vinculan con indicadores estructurales de recepción de derecho a la salud en Colombia, como también aporta indicadores de proceso y resultado y señales de progreso cualitativas a partir de distintas fuentes de información públicas y otros relevamientos.